

trabajador particular de la tercera edad operado de la rodilla hace seis meses, sigue esperando que COMPIN le pague sus licencias médicas. Hoy vive endeudado, pidiendo dinero a su empleador para sobrevivir, mientras el sistema lo ignora.

El mismo doble estándar aparece en el caso de las fundaciones. Mientras a fundaciones afines al gobierno se les transfirieron millones de pesos –sin control, sin requisitos, sin siquiera rendiciones de cuenta–, las empresas privadas que prestan servicios al Estado deben superar un verdadero laberinto burocrático para cobrar lo que les corresponde. Son varios ya los casos sabidos de pequeñas y medianas empresas que trabajando en cumplimiento de los Decretos para subsidios habitacionales N°1 y N°49 del MINVU, han quebrado, no por mala gestión, sino por exigencias administrativas absurdas que retrasaron sus pagos durante meses.

El caso del Gobierno Regional de Los Ríos, cuestionado por la Contraloría por no haber exigido la rendición de más de \$30 mil millones, refleja el nivel de descontrol con que se manejaron los fondos. Mientras tanto, pequeñas empresas mueren asfixiadas por la misma mano que con tanta soltura repartió recursos a operadores políticos disfrazados de benefactores sociales.

¿Hasta cuándo esta asimetría? ¿Hasta cuándo el Estado será un oasis para unos y un desierto para los demás?

Jorge De la Maza Schleyer
Movimiento Coherencia

Don Juan espera...

● En Chile conviven dos realidades paralelas, ambas sostenidas con recursos públicos. Por un lado, según cifras oficiales, a 25.078 funcionarios públicos se les emitieron 35.585 licencias médicas, con el evidente costo para el Estado. Por otro, don Juan, un